

Informes de la sociedad civil: compromisos difíciles y prioridades conflictivas en la implementación de los ODS

POR ROBERTO BISSIO, SOCIAL WATCH

Hablando en la OCDE recientemente, el embajador David Donoghue, ex co-facilitador de las discusiones en la ONU que condujeron a la Agenda 2030, dijo: «Se enfatiza mucho sobre las sinergias entre los diferentes ODS, y con razón, pero no se presta mucha atención al compromiso entre objetivos conflictivos».¹

Estas tensiones entre diferentes prioridades que compiten entre sí por recursos presupuestales escasos, por la atención limitada de los dirigentes políticos o por el interés de los medios de comunicación rara vez son tratadas en los debates oficiales, pero aparecen siempre en los informes independientes de la sociedad civil sobre la implementación de la Agenda 2030 ... o la falta de ella.

La reducción de la desigualdad sacrificada por objetivos macroeconómicos

En **Argentina**, la tensión es entre salarios y derechos laborales por un lado y empleo por el otro, según el informe de Hernán Medina y Agustina Carpio, de la iniciativa ODS del Foro de Ciudadanos por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO).²

El presidente Mauricio Macri, en el gobierno desde diciembre de 2015, «apoya la idea de que los trabajadores tienen que reducir sus salarios y derechos laborales para mejorar la competitividad de la economía y permitir que los trabajadores informales obtengan empleos formales y protección social». Como resultado, en una economía con alta inflación, el ingreso familiar promedio perdió un 15 por ciento en términos reales en 2018, mientras que la pobreza creció un cinco por ciento para llegar a un 33,6 por ciento al final del año, mientras que un tercio de los trabajadores todavía tienen trabajos informales.

La desigualdad de ingresos empeora por la discriminación de género, con una brecha de ingresos del 27 por ciento entre mujeres y hombres. Cada vez más mujeres intentan encontrar un trabajo para compensar la disminución de los ingresos familiares, pero el desempleo entre las mujeres es un 2 por ciento más alto que el de los hombres (11% a 9% en el total agregado), y peor para las mujeres jóvenes (de 14 a 29 años) con una tasa de desempleo de 21.5 por ciento, mientras que para los hombres de la misma edad es de 17.3 por ciento.

Por el contrario, **Guatemala** tiene un desempeño macroeconómico admirable, con décadas de crecimiento económico continuo, baja inflación, déficit pequeño y una deuda pública total de menos de una cuarta parte del PIB. Sin embargo, el informe alternativo de ODS de CONGCOOP (Coordinación de ONG y Cooperativas) muestra la coexistencia de esas envidiables figuras con «el abandono de la clase media, los pobres y los pueblos indígenas» como resultado de una «concentración masiva de activos productivos, comenzando con la tierra». La desigualdad de ingresos ha alcanzado un índice de Gini de 0.53, el más alto de Centroamérica y uno de los peores del mundo. Si bien la economía está en auge, gracias a las exportaciones agrícolas y las remesas de los migrantes, la pobreza afectaba al 59 por ciento de la población en 2018 (frente al 51% en 2006) y la pobreza extrema al 23 por ciento.

1 De las notas del autor, quien fue relator del debate sobre estos compromisos durante el evento sobre «Dimensiones ocultas de la pobreza», coorganizado por ATD-Cuarto Mundo y el Centro para la Oportunidad y la Igualdad en la sede de la OCDE en París, el 10 de mayo de 2019.

2 Todos los informes alternativos citados están disponibles en www.socialwatch.org

Una campaña popular contra la corrupción, alentada por la asistencia de la ONU al sistema judicial guatemalteco, condujo en 2015 a la destitución del presidente y el vicepresidente. Pero en lugar de aprovechar ese impulso para mejorar la calidad del gasto público, el nuevo presidente, Jimmy Morales, desmanteló el enjuiciamiento de la corrupción. Además, «las élites económicas históricamente se han negado a colaborar con el Estado y la sociedad», negándose a pagar impuestos, y presionando contra cualquier intento del gobierno de obligarlos a hacerlo, por ejemplo cerrando todos los comercios por un día en 1987 y 2001. Como resultado, los impuestos en Guatemala son los más bajos del mundo, según el Banco Mundial, con ingresos públicos de apenas 12 por ciento del PIB, menos de la mitad de lo que se necesitaría para cumplir con los ODS. «Un Estado así capturado por las élites del poder legales e ilegales no puede avanzar hacia ninguno de los 17 ODS», concluye el informe.

Paraguay tiene una historia similar de «ingresos gubernamentales muy bajos, renuencia generalizada a pagar impuestos en un clima de corrupción y una fuerte oposición por parte de empresarios y personas con altos ingresos a cualquier aumento en sus contribuciones fiscales», informa Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana.

Uno de los pocos aumentos de impuestos que el público acepta es el de los impuestos al tabaco, ya que generan ingresos pero también abordan un problema de salud pública. Sin embargo, los productores y el ex presidente Horacio Cartes (2013-2018), propietario de la mayor compañía tabacalera del país, se opusieron con vehemencia a una ley propuesta para aumentar los impuestos al tabaco al 40 por ciento. Durante las discusiones parlamentarias, el Ministerio de Finanzas argumentó que cualquier aumento de impuestos debería ser parte de una reforma más amplia con el consenso de todos los interesados», mientras que el ministro de Salud, Antonio Barrios, minimizó los efectos y dijo: «Más personas mueren a causa de enfermedades cardiovasculares y accidentes de tráfico que debido al cáncer de pulmón». Finalmente, el Senado redujo el aumento de impuestos a un mero 5 por ciento, llevando el impuesto al tabaco de 13 a 18 por ciento y también eliminó las disposiciones para dedicar esos ingresos a la salud pública.

Esto está en oposición directa con el objetivo 3.a de los ODS que compromete a los países a «fortalecer la implementación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco» y el informe alternativo de la sociedad civil se pregunta: «¿Hasta cuándo prevalecerán los intereses personales y corporativos de los poderosos sobre la evidencia científica y las necesidades de financiación del país?»

La evidencia científica y los datos no faltan en absoluto en el **Reino Unido**, donde la desigualdad continúa aumentando. «Los investigadores y profesionales de derechos humanos que trabajan en el Reino Unido tienen acceso a una gran cantidad de datos relevantes y detallados, al menos en comparación con otros países», reconoce Just Fair, un grupo de activistas de derechos económicos y sociales. Es por eso que les resulta «aún más sorprendente» que el Informe Nacional Voluntario de 2019 del Reino Unido no desglose la información. «Para garantizar que nadie se quede atrás y proporcionar una imagen verdaderamente significativa de la situación, el gobierno debe reunir y presentar evidencia sobre toda discriminación basada en motivos prohibidos por las leyes internacionales y nacionales de derechos humanos, y esto incluye las disparidades de ingresos y riqueza.»

Just Fair informa que «el Reino Unido es una sociedad altamente desigual. Por ejemplo, la esperanza de vida de las mujeres nacidas en zonas desfavorecidas ha disminuido en los últimos años, algo totalmente inaceptable en la quinta mayor economía del mundo.»

El gobierno del Reino Unido afirma tener «algunas de las leyes de igualdad más fuertes del mundo, incluida la Ley de Igualdad de 2010». Para ser fiel a este compromiso, argumenta Just Fair, «el gobierno debe implementar la legislación en su totalidad, incluido el deber socioeconómico (sección 1 de la Ley de Igualdad)». Este deber requeriría que las autoridades públicas consideren activamente cómo sus decisiones y políticas estratégicamente importantes podrían aumentar o disminuir las desigualdades de resultados. El informe alternativo descubre que «lamentablemente, los sucesivos gobiernos no han puesto en práctica la regulación necesaria para activar el deber socioeconómico, lo que significa que esta

obligación no es técnicamente vinculante para las autoridades públicas». Es alentador que el deber se haya hecho realidad en Escocia en 2018 y el gobierno galés ha anunciado que continuará esta política en 2019. El deber socioeconómico es una palanca poderosa para abordar las causas estructurales de las desigualdades materiales y sus efectos negativos sobre los derechos humanos y el bienestar. Hacerla cumplir sería una señal positiva de la determinación del Gobierno de reducir las desigualdades de ingresos y riqueza y cumplir con el ODS 10.

La desigualdad también es una preocupación importante para la sociedad civil en **Bangladesh**. El informe del Grupo de Trabajo de Equidad y Justicia de Bangladesh (EquityBD) cuantifica las crecientes desigualdades. El índice de Palma (entre el ingreso del 10% más rico y el del 40% más pobre) creció de 1.68 en 1964 a 2.93 en 2016. Las desigualdades se abordan en los planes oficiales, pero EquityBD considera que ponerlos en práctica «será un trabajo difícil para el gobierno de Bangladesh debido a la falta de buena gobernanza en algunos casos. El sector financiero aún necesita una atención especial, ya que los flujos financieros ilícitos y las grandes cantidades de préstamos bancarios morosos aún están vigentes. La descentralización del desarrollo es otro tema crucial».

La ventaja a corto plazo supera la implementación a largo plazo

En **Finlandia**, el informe alternativo de Fingo, la asociación de ONG de desarrollo finlandesas, concluye que «los conflictos de intereses entre los actores conducen a decisiones donde una ventaja económica a corto plazo eclipsa la sostenibilidad a largo plazo».

El gobierno de Finlandia se felicita por estar «entre los primeros en redactar un plan de implementación nacional, iniciar un presupuesto de desarrollo sostenible, establecer un sistema de monitoreo inclusivo y un panel de ciudadanos, y encargar una evaluación externa de la primera política nacional de la Agenda 2030 del mundo, el informe PATH2030 publicado en marzo de 2019». Sin embargo, el informe alternativo muestra que Finlandia no está consistentemente comprometida con un enfoque basado en los derechos humanos de la Agenda 2030, para garantizar que «nadie se quede atrás». Además,

«la Agenda 2030 es ampliamente conocida en Finlandia, pero no existe una comprensión coherente de su interpretación y significado político».

Finlandia también enfrenta tensiones entre el consumo interno y las obligaciones ambientales. El país «consume más que nuestra porción equitativa del medio ambiente y esto tiene impactos significativos, incluso más allá de nuestras fronteras. Por ejemplo, se estima que casi la mitad de nuestra huella hídrica está compuesta por cadenas de producción que tienen lugar en otros lugares».

El informe también encuentra «un desajuste entre la retórica de Finlandia sobre la responsabilidad global y sus compromisos de financiación. El recorte de casi el 40 por ciento en los fondos para el desarrollo por parte del gobierno de Juha Sipilä (sustituido por el socialdemócrata Antti Rinne en junio de 2019) y la redirección de los ingresos del comercio de emisiones de carbón a inversiones privadas erosionaron nuestra credibilidad internacional y degradaron a Finlandia del grupo de referencia nórdico». El financiamiento de la cooperación para el desarrollo de las ONG se redujo aún más (43%), a pesar de que son precisamente estas organizaciones las que pueden llegar a los más vulnerables de manera eficaz.

Chipre también sufre una tensión entre las respuestas urgentes a la crisis económica y financiera y sus compromisos de desarrollo sostenible. Como miembro de la Unión Europea, Chipre debe implementar los conceptos de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) y Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPSD), pero ninguno de estos se menciona en el Informe Nacional Voluntario oficial, que de hecho omite todo el ODS 17 (sobre implementación).

Según el informe alternativo de Charalambos Stergiou, Yolanda Frangou y Charalambos Vrasidas, de CARDET / Universidad de Nicosia, «como resultado de las estrictas medidas de austeridad implementadas desde marzo de 2013, se suspendió la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Cyprus Aid» y «Chipre no tienen mecanismos de coordinación sobre CPD dentro de la administración nacional y no hay participación en CPD por parte del Parlamento de Chipre, la sociedad civil o el sector privado».

CARDET espera que «la revitalización de la discusión sobre CPD / CPSD sea un elemento clave que conduzca potencialmente a resultados positivos a largo plazo en sectores como la migración y el cambio climático».

En algunos lugares, los planes son buenos pero simplemente no se implementan. En **Jordania**, la presentación del Informe Nacional Voluntario en 2017 fue una oportunidad «para fortalecer aún más la apropiación nacional de la Agenda 2030, crear un impulso proactivo a su alrededor y acelerar su realización». La preparación del informe «aseguró la participación más amplia de los principales grupos y organizaciones», según el informe del Centro Phoenix para Estudios Económicos e Informáticos. Este informe fue «un notable paso adelante en la creación de una estrategia inclusiva para lograr los ODS», pero «la falta de implementación concreta y efectiva de esta estrategia, así como la falla en la implementación de un sistema de monitoreo efectivo, afectó dramáticamente su efectividad como herramienta para integrar los ODS en la agenda nacional».

En menos de dos años desde la presentación del informe se sucedieron tres ministros diferentes de Planificación y Cooperación Internacional y el primer ministro también ha cambiado. El informe de la sociedad civil atribuye la falta de implementación a «la desaceleración económica en curso, así como a la ausencia de cooperación entre las administraciones central y local, por un lado, y, por otro, entre el gobierno y la sociedad civil».

Aprobar buenos planes y no implementarlos también sucede en **Canadá**. Con el lanzamiento de Oportunidad para Todos en agosto de 2018, seguido de la introducción de la Ley de Reducción de la Pobreza en noviembre de 2018, el gobierno federal estableció por primera vez objetivos para reducir la pobreza en Canadá, definió una línea oficial de pobreza y estableció un marco y un proceso para informar públicamente sobre el progreso, de acuerdo con su compromiso de «acabar con la pobreza en todas sus formas en todas partes» establecido en la Agenda 2030.

El informe del Centro Canadiense para Políticas Alternativas elogia esta «victoria política significativa», que proporciona «una arquitectura y

mecanismos para hacer que los gobiernos rindan cuentas para crear una sociedad donde las necesidades básicas de todos estén aseguradas y su participación activa en la vida comunitaria apoyada». Pero, al mismo tiempo, agrega el informe, «no incluye ninguna inversión nueva en los programas necesarios para lograr los objetivos establecidos en la estrategia». Además, los objetivos de reducir la pobreza en un 20 por ciento para 2020 y en un 50 por ciento para 2030 «carecen de ambición y sentido de urgencia». El informe valora el nuevo plan «más como un marco que como una estrategia para acelerar la reducción de la pobreza. Una estrategia implica un plan para llegar desde donde estamos hasta donde queremos ir, y, de manera crucial, los recursos para respaldarlo. En este sentido, los canadienses de bajos ingresos todavía están esperando».

«Otra generación de niños crecerá en la pobreza y millones más continuarán luchando». El gobierno debería haber tomado medidas más decisivas para abordar las necesidades inmediatas de aquellos que viven en la pobreza más profunda y fortalecer la red de seguridad social de Canadá a través de inversiones en cuidado de niños universalmente accesible, medicamentos y programas de capacitación y educación adaptados a los necesitados. «A fin de cuentas -concluye el informe alternativo- la formulación de políticas y presupuestos, supone opciones y valores. Y las opciones que hagamos hoy determinarán la sostenibilidad a largo plazo de nuestra sociedad y nuestra economía para las generaciones futuras».

También en el **Líbano**, la implementación no ha estado a la altura de los compromisos. El informe oficial voluntario libanés de 2018 culpa a la crisis de Siria por los déficits económicos que aumentaron la deuda, así como por el estancamiento económico, la duplicación del desempleo y el empeoramiento de las tasas de pobreza. Sin embargo, según el informe alternativo de la sociedad civil elaborado por la Red de ONG Árabes para el Desarrollo (ANND), «esta narrativa exclusivamente negativa sobre los refugiados sirios no distingue entre el gran impacto de la guerra siria en la economía y la situación política en el Líbano, y el impacto diversificado de la presencia de los refugiados sirios en el Líbano. Esto último permitió que aumentara el flujo financiero de ayudas, así como el

consumo interno. La inmigración produjo entre uno y 1.5 por ciento de crecimiento del PIB, y proporcionó una fuerza laboral barata que evitó la quiebra de muchas pequeñas empresas».

Por lo tanto, «la crisis siria no puede eclipsar los impactos negativos de las políticas económicas y sociales implementadas durante mucho tiempo, así como las lagunas creadas por la falta de transparencia y responsabilidad. Centrándose en las economías rentistas, retrasando los mecanismos de redistribución para abordar las desigualdades, careciendo de un sistema de protección social universal y con la brecha continua entre las políticas de educación y empleo, el Líbano ha estado cultivando resultados de desarrollo negativos por sus propias decisiones políticas».

El informe oficial libanés ha sido evaluado por la sociedad civil como «un paso bueno pero menor; porque debe complementarse con un enfoque sistemático y holístico a nivel nacional, tanto para la implementación como para el monitoreo». En cambio, el gobierno «adoptó un enfoque sectorial y una metodología fragmentada». En lugar de integrar los pilares del desarrollo humano sostenible, se limitó a acumular las estrategias y planes de los respectivos ministerios. El Comité Nacional para los ODS debería haberse esforzado por integrar las dimensiones económicas, sociales, ambientales, políticas y culturales en el discurso del desarrollo, pero «continúa con un ejercicio de listado de varias estrategias y planes a corto plazo y programas específicos vinculados a cada uno de los ODS. Esto no refleja la apropiación nacional requerida, ni proporciona un paso adelante para abordar la falta de una estrategia global de desarrollo sostenible basada en los derechos y elaborada en consulta con las diferentes partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil».

Derechos humanos intercambiados por éxito electoral

En Brasil, el gobierno del Capitán Jair Bolsonaro no oculta su desdén por las políticas e instituciones destinadas a apoyar a las personas que viven en la pobreza. En su primer día en el cargo, el 1 de enero de 2019, el presidente Bolsonaro disolvió las

instituciones responsables de las políticas de Hambre Cero (ver Contribución Especial 0.2 sobre la extinción temporal de CONSEA), una iniciativa que inspiró políticas contra la pobreza en todo el mundo. El informe alternativo del INESC documenta la reducción, en las siguientes semanas, de los organismos de política pública con participación de la sociedad civil de 500 a 70. Los organismos de monitoreo afectados incluyen el Consejo de Políticas de Drogas, el Consejo de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Consejo para la Erradicación del Trabajo Forzado, la Comisión para la Biodiversidad, y muchos más. Defensores del derecho a la tierra, activistas sindicales y de ONGs están siendo amenazados y la Comisión Pastoral de la Tierra, un cuerpo de la Iglesia Católica, informó un aumento dramático en los primeros meses de 2019 de los asesinatos relacionados con conflictos por la tierra.

A nivel internacional, Brasil se retiró del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Migración Segura, Ordenada y Regular que ayudara a crear unos meses antes, se negó a organizar la COP-25 de la Convención sobre el Clima y abandonó UNASUR, la Unión de Países de América del Sur.

El informe de la sociedad civil encuentra que la administración de Bolsonaro a «actúa como si los derechos humanos estuvieran vinculados a la política partidaria o a una determinada ideología e invierte en el discurso del odio, con lo cual profundiza la brecha en nuestra sociedad». Por lo tanto, «no hay un camino para el cumplimiento de la Agenda 2030, y en su lugar la sociedad civil debe volver a luchar por supuestos muy simples que se dieron por sentados: que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión o cualquier otra circunstancia, y que todos seamos vistos como humanos y no solo como enemigos».

En Hungría, la fijación de objetivos para 2030 no está determinada tanto por los ODS como por la propuesta del objetivo mucho más simple de alcanzar a Austria para esa fecha, tal como lo propuso el Banco Central de Hungría (MNB). Cuando Austria-Hungría se separó, hace un siglo, el ingreso nacional húngaro per cápita era un 85 por ciento del de Austria. En 2015,

según datos del Banco Mundial, el ingreso per cápita de Hungría, medido en paridad de poder adquisitivo, era aproximadamente la mitad del de su vecino.

Las proyecciones optimistas del MNB se basan en el supuesto de que continúan las altas tasas de crecimiento actuales de más del 4 por ciento anual, duplicando los salarios nominales y asegurando el pleno empleo.

Más realista, el Informe Social publicado por el instituto de investigación social TÁRKI analiza la educación, la esperanza de vida y las cifras económicas para concluir que Hungría podría alcanzar a Portugal (la nación más pobre de Europa Occidental) en diez años. TÁRKI pronostica un «shock futuro» debido a las muchas fallas del sistema educativo, basado en la formación profesional para satisfacer las necesidades inmediatas del mercado laboral pero que desalienta la innovación, la curiosidad y la flexibilidad.

La continuación del alto crecimiento económico es incierta y es poco probable que la emigración, particularmente de jóvenes calificados, disminuya, ya que los salarios húngaros son menos de la mitad del promedio de Europa Occidental. El diez por ciento de los aproximadamente 4 millones de húngaros en el mercado laboral están trabajando o estudiando en otros países y la proporción de emigración con educación terciaria es la más alta de Europa.

Mientras tanto, el primer ministro Viktor Orbán explota el miedo a la migración «como una herramienta eficaz para movilizar a los votantes menos educados, principalmente en las zonas rurales y en otras ciudades que no sean Budapest». Según el informe húngaro de Social Watch 2019 de Matyas Benyik, después de la victoria electoral de Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, en el poder desde 2010, «la democracia en Hungría continuará erosionándose, la corrupción generalizada socavará la democracia y el crecimiento económico, la polarización social continuará, la brecha entre el Budapest liberal y el campo más tradicional crecerá, los jóvenes calificados continuarán emigrando en grandes cantidades y los conflictos con la Unión Europea aumentarán».

Dado que «las instituciones húngaras destinadas a contrarrestar el poder del gobierno, como el Tribunal Constitucional, los medios de comunicación y el presidente de Hungría, no han cumplido sus mandatos, la UE es el último mecanismo de responsabilidad que queda».

Ganancias vs pérdidas en México

En México, en contraste, las elecciones federales de 2018 llevaron a Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) a la presidencia con un mandato claro de lo que él llama la Cuarta Transformación (después de la Independencia en 1810, la Reforma liberal en 1858 y la Revolución en 1910). En marzo de 2019, resumiendo sus primeros cien días en el gobierno, AMLO enfatizó que «estamos protegiendo el medio ambiente con acciones concretas, no hemos aprobado el maíz transgénico, no extraeremos petróleo o gas a través del fracking, cancelamos la licencia para la minería a cielo abierto en Los Cardones (Baja California) y garantizamos que el agua no se privatizará, se crearán nuevas reservas naturales y se protegerá la flora y la fauna».

Si bien reconoce estos logros, el informe alternativo de Areli Sandoval Terán, de Espacio DESCA, argumenta que aún queda mucho por hacer, ya que el modelo económico todavía se basa en el extractivismo, principalmente de combustibles fósiles, la creación de una Guardia Nacional «reproduce un modelo de seguridad basado en la participación del ejército en temas de seguridad pública nacional «y» continúa promoviendo megaproyectos como el Tren Maya o grandes centrales termoeléctricas en Morelos» aprobado sin el consentimiento previo e informado de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

Además, las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil son tensas, luego de la decisión de reducir el financiamiento público a las ONG y fundaciones para «eliminar intermediarios».

Mayor desigualdad es el precio del crecimiento económico en India

En la India, el tema principal del informe oficial es cómo el rápido crecimiento económico ha reducido drásticamente la pobreza. Un estudio de 2018 respalda esta afirmación diciendo que la pobreza extrema está disminuyendo en India a un ritmo de 44 personas por minuto como resultado de lo cual, desde mayo de 2018, la India afirma que ya no tiene el mayor número de personas pobres del mundo. A pesar de esta dramática reducción de la pobreza, más de 73 millones de indios aún viven por debajo del umbral internacional de pobreza. La mayoría de estas personas que subsisten con menos de 1,90USD al día se encuentran en zonas rurales.

Pero mientras el número absoluto de pobres disminuye, la desigualdad aumenta rápidamente. Un informe de Oxfam de 2018 dice que el uno por ciento más rico de la India obtuvo el 73 por ciento de la riqueza nacional generada en 2017.

Una política fiscal un gasto público más equitativos pueden ayudar a reducir la desigualdad. En 2017, el ministro de Finanzas aceptó que la política fiscal de la India no era socialmente justa y aseguró que la base tributaria se ampliaría. Ha habido cierto éxito ya que los ingresos por impuestos directos aumentaron un 19 por ciento en un año, principalmente debido al aumento de la recaudación del impuesto sobre la renta personal. Sin embargo, continúan los recortes del impuesto a las ganancias corporativas, lo que lleva a una pérdida de ingresos estimada de 1.100 millones de dólares americanos (7,000 millones de rupias) para 2018-2019.

Mientras tanto, el Sistema Nacional Mahatma Gandhi de Garantía de Empleo Rural, que ha sacado a millones de personas de la pobreza desde 2005, ha visto disminuir su apoyo presupuestario, con asignaciones sin cambios entre 2017-2018 y 2018-2019, lo que significa una caída en términos reales. Esto ha resultado en demoras en el pago de salarios, falta de pago de compensación por estas demoras, racionamiento del trabajo disponible (a niveles mucho más bajos que el trabajo remunerado garantizado de 100 días al año) y falta de pago del salario mínimo. La magnitud de esta

denegación de derechos a los más pobres de la India se puede medir por el hecho de que los salarios no pagados acumulados por sí solos suman alrededor de 700 millones de dólares americanos (4.786 millones de rupias) a partir de enero de 2018.

La creciente desigualdad en la India no solo causa pobreza de ingresos o activos, sino que también conduce a un acceso desigual a las necesidades básicas: alimentos, medios de vida, agua y saneamiento, salud y educación. Estas disparidades afectan desproporcionadamente a los grupos históricamente marginados, como los dalit, las tribus y los musulmanes. Dentro de cada grupo, las mujeres están en la peor situación.

Infraestructura versus desigualdad en Filipinas

En Filipinas, la preparación del informe oficial 2019 catalizó un proceso de consulta con múltiples partes interesadas al que se invitó a algunas organizaciones de la sociedad civil, como Social Watch Filipinas (SWP). SWP convocó un proceso de consulta más amplio para producir aportes al informe oficial y un informe independiente de la sociedad civil.

Filipinas es actualmente una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, con un PIB que creció entre el 6 y el 7 por ciento en 2018 y aumenta a un promedio de casi el 5 por ciento anual en la última década, pero esas cifras coexisten con una alta tasa de pobreza, una situación paradójica llamada «crecimiento sin empleo».

SWP comenta que «parece haber una perspectiva tácita pero dominante sobre la riqueza, según la cual mientras se reduzca la pobreza, no debería haber objeciones a las ganancias desenfrenadas de los ricos. Se supone que la riqueza filtrará a los más pobres. La economía por goteo afirma que las altas tasas de crecimiento aumentan el empleo, los ingresos y el nivel de vida. Sin embargo, ese no es el caso en absoluto. De hecho, la desigualdad económica o la brecha entre los más pobres y los más ricos continúa ampliándose, y los pobres constituyen la mayoría y coexisten con una élite de muy pocos integrantes. La clave no es la tasa de crecimiento, sino el tipo de crecimiento económico que está experimentando el país».

El crecimiento filipino se basa en gran medida en el programa «Build Build Build» (BBB, o sea Construir, Construir, Construir), una ambiciosa iniciativa de infraestructura con 75 proyectos emblemáticos planificados, financiados por el gobierno, la asistencia externa (principalmente de China) y las asociaciones público-privadas (APP).

El BBB es visto por la sociedad civil como generador de deuda, demasiado urbano, concentrado en áreas desarrolladas y descuidando las áreas rurales. Su progreso ha sido desigual, debido a la falta de capacidad y financiamiento, deficiencias en el diseño y falta de coordinación.

Los costos y externalidades aún no se han evaluado. «El impacto negativo de este programa de infraestructura masiva, específicamente la conversión a otros usos de la tierra de tierras agrícolas ya en disminución, aún no se ha determinado. Pero un impacto emergente ha sido el movimiento de la población rural pobre de la agricultura a la industria de la construcción y la interrupción de las iniciativas de desarrollo de la cadena de valor agrícola de pequeños productores que el estado ha descuidado durante mucho tiempo. En total, el gasto en agricultura, donde la mayoría de los más pobres se gana la vida, es decepcionante para un país que desea lograr la industrialización verde. También es previsible que esta infraestructura de uso intensivo de combustibles fósiles y los programas y proyectos de energía podrían revertir los logros modestos logrados en la protección y rehabilitación ambiental.»

En su discurso de bienvenida del encuentro, poco antes de su lamentado deceso, el coordinador de Social Watch Filipinas y presidente del Movimiento de Reconstrucción Rural de Filipinas (PRRM), Isagani Serrano, resumió su consejo a los colegas filipinos de la sociedad civil con palabras que también son un mensaje a los ciudadanos del mundo: «Muchas cosas buenas están sucediendo en la sociedad en su conjunto. Pero necesitamos interpelar más al gobierno, no solo para lograr un «enfoque de gobierno completo», sino un «enfoque de toda la sociedad» para acercarnos a nuestro sueño de justicia en un mundo frágil».

Roberto Bissio es director ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo (ITeM) y coordinador de la red Social Watch.